

tado, que mandó, quedara detenida en la prision de las recojidas, sin consignarla á alguna autoridad, ni pronunciar resolucian gubernativa, respecto de ella, antes del término de tres dias.

Considerando; que si en las facultades del gefe político está imponer por via de pena gubernativa, la de prision hasta por un mes, debe de hacerlo de plano y dentro de tres dias, con arreglo al art. 19 de la Constitucion federal, que establece que ninguna detencion pueda exceder del término de tres dias, sin que se justifique con un auto motivado de prision y los demas requisitos que establezca la ley; cuya garantía se ha infringido en el caso;

Se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada el 14 del mes próximo pasado por el Juez de Distrito de Guadalajara, que dispone, que la justicia de la Union, ampara y protege á Dolores Sanchez, por haber sido violada en su persona la garantía constitucional, consignada en el art. 19 del código fundamental de la República.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia, para los efectos consiguientes: públíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por mayoría de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Aza.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis María Aguilar,* secretario.

Es copia que certifico. México diez de Agosto de mil ochocientos setenta y uno.
P. Guzman.

AMPARO.

Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Oaxaca por Felipe Cruz, contra el C. gobernador del Estado por haberlo consignado sin las formalidades legales al servicio de las armas.

PEDIMENTO FISCAL.

C. juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que Felipe Cruz en su escrito de 30 de Marzo último, solicita de vd. el amparo contra la providencia del C. gobernador del Estado, quien segun refiere aquel, lo consignó al servicio de las armas en el ejército nacional, sin facultad y sin formalidad algunas, por solo proteger los intereses del dueño del molino de Lazo C. Ramon de la Cajiga, violando así la garantía que sanciona para todos los habitantes de la República el art. 16 de la Constitución federal, para no ser molestados en sus personas, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que motive el procedimiento.

El C. gobernador informa á vd. con fecha 4 del corriente, que el quejoso no fué destinado á tal servicio de la manera que asevera, sino por el tribunal de vagos de la cabecera del Distrito de Etla; el cual, procediendo conforme á la ley de 5 de Enero de 1857, lo setenció al servicio de las armas con las formalidades que prescribe dicha ley; y justifica su relacion con el testimonio de la acta respectiva, que comprende tambien la sentencia.

Siendo los hechos así, el Promotor no cree procedente el recurso, que solo pudiera tener lugar si fuera cierto que, como dice el quejoso, el C. gobernador sin autoridad y sin fórmulas hubiese destinándolo al servicio militar; pero cuando el procedimiento ha sido de una autoridad, obrando en la esfera que le marca la ley, el quejoso podrá sentirse agraviado por motivos fundados ó infundados sobre lo que puede promover lo

que crea convenir a sus derechos; pero no implorar el amparo, porque falta la base que es la omisión de fórmulas y la carencia de facultades en el funcionario autor del procedimiento reclamado. Si la citada ley que no está derogada, inviste al tribunal de vagos de la facultad de que respecto al quejoso ha hecho uso el de Etla, la justicia federal no puede deshacer lo hecho aun cuando el fallo fuere injusto, porque un fallo injusto puede muy bien haber sido pronunciado con autoridad suficiente y median-do las formalidades, que es todo lo que se procura con el amparo de la justicia federal.

El quejoso hace tambien mérito de que conforme al decreto del Estado de 27 de Diciembre de 1859 que mandó cubrir el contingente del ejército por medio de enganches y creó un fondo para agenciarlos, él no debía haber sido consignado á las armas, habiendo pagado su cuota destinada á dicho fondo.

Una vez probado que no fué su destino á las armas efecto de una arbitrariedad, sino de una sentencia pronunciada por tribunal competente, su queja no puede fundarse en esta última razón: así es que, ateniéndose á lo dicho, insiste el Promotor en que el recurso no procede; en cuya virtud, á vd. pide se sirva así declararlo.

Repito el que suscribe, que no ha sido, como asegura el quejoso, abogado de Cajiga en el pleito que respecto de aguas sigue con el pueblo de San Agustín; y lo advierte, no porque quiera que sus razonamientos hagan mayor impresion en el ánimo de vd. dándose un baño de imparcialidad, sino por su propio honor, pues sabe muy bien que la razón y la verdad no tienen mas ó menos peso porque las vierta una persona apasionado ó imparcial para un buen juicio, como es el de vd.

Oaxaca, Abril once de mil ochocientos setenta y uno.—*José M. Ballesteros.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Oaxaca, Abril veintiocho de mil ochocientos setenta y uno.

Vistas estas actuaciones promovidas por Felipe Cruz preso en la cárcel pública de esta ciudad y vecino del pueblo de San Agustín del Distrito de la Villa de Etla, sobre amparo contra la providencia del C. gobernador de este Estado que lo mandó aprisionar y consignar al servicio del ejército en clase de reemplazo: el informe del C. gobernador segun el cual la providencia reclamada la apoyó en el testimonio de la sentencia pronunciada por el tribunal de vagos de la misma Villa en 17 del mes anterior; y en la conservacion del orden público el pedimento del C. Promotor fiscal en el que solicita se deseché la pretension del quejoso por haber obrado el C. gobernador en la órbita de sus atribuciones al dictar el acto reclamado, y todo lo demas que de lo actuado ver convino. Considerando: que tratándose de hacer prevalecer en su vigor y fuerza todos y cada uno de los artículos de la Constitución general de la República, que en el presente caso debe apreciarse el 18 de la misma Constitución citada que previene que en la República nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales: que atendiendo al sentido literal del expresado artículo, no hay duda que esta clase de tribunales dejaron de existir desde la publicacion de la carta fundamental de la Nación: que al sujetar á los vagos á ser juzgados por el tribunal especial, es considerarlos como aforados, lo cual es contrario al espíritu del mismo artículo 18 que solo admite estos privilegios en los delitos y faltas que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Considerando: que si bien el quejoso pudiera acaso ser vago, debió habérsele consignado á los tribunales ordinarios y no al especial cuya existencia no es admitida por el artículo 18, tantas veces referido: que el peticionario ha manifes-

tado en su escrito respectivo que fué consignado al servicio del ejército por las desavencencias de su padre Tranquilino de la Cruz que tiene con el C. gobernador, sin embargo de estar exonerado para esta clase de servicios por haber pagado la cuota decretada por el Congreso del Estado en 27 de Diciembre de 1869: que aunque si bien es cierto que la primera parte de la asercion del quejoso no se halla comprobada en autos, tambien lo es que lo está la segunda con el recibo del recaudador respectivo que corre á fojas primera de estos autos: que supuesto la no existencia del tribunal especial de vagos, el fundamento legal que menciona en su informe el C. gobernador ha quedado desvirtuado, y de consiguiente su providencia ha violado en la persona del solicitante las garantías que otorgan los artículos 59 y 29 de la Constitucion general de la República. Y en vista de lo alegado por la parte quejosa en su escrito respectivo, lo pedido por el C. Promotor fiscal y con fundamento de los artículos arriba citados: La justicia federal declara:

Primero; que ampara y protege á Felipe Cruz contra el acto por el cual se consignó al servicio de las armas del ejército en clase de reemplazo.

Segundo; dedúzcase testimonio de lo conducente respecto del delito de falsedad que se nota en el certificado exhibido por el quejoso y remítase al C. Juez de la Villa de Etla para lo que hubiere lugar, y

Tercero; hágase saber; publíquese y remítase á la Suprema Corte de Justicia para los efectos de la ley. El C. juez de Distrito lo decretó y firmó: Doy fé.—*Joaquín Mauleon.—Juan Rey.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Agosto ocho de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Oaxaca, por el C. Felipe Cruz contra los procedimientos del gobernador del Estado, en virtud de los cuales ha sido consignado al servicio de las armas en calidad de reemplazo. Visto el parecer fiscal, el informe de la autoridad contra quien se solicita el recurso y las diligencias mandadas practicar por esta Suprema Corte de Justicia, con las demás constancias de autos.

Considerando: que Felipe Cruz apoya su demanda en el art. 16 de la Constitucion de la República, alegando que se le ha molestado en su persona sin mandamiento escrito de autoridad competente y consignado al servicio de las armas, no obstante haber cumplido con la ley de 27 de Diciembre de 869, expedida por la Legislatura del Estado, cuya constancia obra en autos: que la acta levantada en Etla por el tribunal de vagos que ha servido de apoyo al gobernador de Oaxaca para dictar su providencia, no está plenamente comprobada su autenticidad, segun aparece de las diligencias practicadas por el Juzgado de Distrito antes de pronunciar sentencia, y por las que posteriormente se mandaron practicar por la Suprema Corte, y finalmente: que sobre la legalidad de los documentos presentados por Felipe Cruz, quedan los derechos á salvo á quienes les competan, para hacerlos valer en la vía y forma prescritas por las leyes. Con tales fundamentos, se declara: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juzgado de Distrito de Oaxaca, solo en la parte que manda en nombre de los poderes de la Union amparar y proteger al quejoso, contra el acto por el cual se le consignó al servicio de las armas del ejército en calidad de reemplazo.

Devuélvanse las actuaciones al juzgado referido con testimonio de este fallo para los efectos consiguientes: publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decreta-

ron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafraqua.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Agosto doce de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Coahuila por Feliciano Saldaña contra el gobernador del Estado por violacion de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El promotor fiscal dice: que ha visto el ocurso de Feliciano Saldaña en que solicita amparo por violacion de garantías individuales, y el informe del C. gobernador del Estado que es quien se dice por el ocurrente la autoridad ejecutora del acto que se reclama. De uno y otro se viene en conocimiento, que desde el mes de Junio del año próximo pasado se redujo á Saldaña á prision por faltas al servicio militar, consistiendo estas en el extravío de los pliegos que conducía para Candela y el hurto del caballo y arma que portaba: que remitido á esta ciudad por la autoridad política de la villa de Ramos Arispe que fué la que hizo la aprehension, fué consignado por el gobierno del Estado al Juez de letras del ramo criminal, quien no obstante su incompetencia estuvo conociendo de su causa hasta el día 18 del mes próximo pasado, en que habiéndose declarado incompetente para conocer de ese delito remitió las diligen-

cias practicadas al gobierno del Estado. Este no admitió la consignacion que le hizo el Juzgado de letras y en tal estado las cosas se solicita el amparo por creerse violadas las garantías que conceden los artículos 14, 16 y 19 de la Constitucion y hallarse el caso comprendido en la fraccion 1ª del artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869.

Desde que el Juzgado de Letras se declaró incompetente para seguir conociendo del asunto, quedó sin valor el auto de formal prision, y no obstante, Saldaña sigue preso sin que haya un juez que conozca de su causa. La violacion de garantías es notoria, y si bien el quejoso señala como autoridad ejecutora al gobernador del Estado que por cierto no tiene ingerencia en este asunto, una vez que se desprendió de todo conocimiento y no admitió la nueva consignacion que se le hizo del reo, el ministerio público cree de su deber manifestar que la autoridad remediata ejecutora del acto que se reclama es sin duda alguna el Juez de letras de lo criminal, pues Saldaña se encuentra en la cárcel pública en virtud del auto de formal prision que este dictó en la causa que le instruía.

En virtud de lo expuesto, el Promotor fiscal propone á vd. mando suspender el acto que se reclama, previo el informe del Juzgado de letras de lo criminal.

Saltillo, Abril trece de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Santos de la Garza y Gutierrez.*

Otro Pedimento del C. Promotor fiscal.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal en el juicio de amparo promovido por Feliciano Saldaña, evacuando el traslado para pedir sobre lo principal, dice: que en su anterior pedimento solicitó la suspension del acto reclamado, por creer notoria la violacion de garantías individuales, pues sin otros antecedentes